

[Artículo publicado hoy en Deia](#)

Behatokia: Por June Fernández- SOS Racismo

Prejuicios xenófobos en tiempos de crisis

COMO dice la frase hecha, el miedo es libre y genera prejuicios que ayudan a reducir la incertidumbre. Nos valemos de ellos para ordenar nuestra mente, simplificar la realidad para procesarla con rapidez y sentir así la falsa sensación de seguridad que permite pensar que conocemos a quien tenemos delante -sea una persona o todo un colectivo al que homogeneizamos-, que podemos prever sus actitudes y conductas futuras. A cambio, eso sí, de limitar nuestra felicidad e impedirnos realizar un análisis correcto de las realidades sociales que nos atañen.

La mitad de la población vasca tiene miedo a que el sistema de bienestar social empeore con la llegada de inmigrantes, revela el último informe sobre percepciones del Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi. Uno de los principales prejuicios es que acaparan las prestaciones sociales. Un estudio de Bakeaz publicado en 2008, entre otros trabajos, indica que las personas inmigrantes aportan a la economía vasca un 23,5% más en impuestos que las personas autóctonas (debido a su mayor tasa de actividad), mientras que su gasto social público se ciñe al que les corresponde porcentualmente (el 4% cuando se hizo el informe). Si bien es cierto que existe una sobrerrepresentación de inmigrantes en el acceso a algunas prestaciones como la renta básica -dado que también están sobrerrepresentados entre la población en riesgo de exclusión social-, esa realidad se compensa con su escaso acceso a otras, como las ayudas a la dependencia. No es cierto que tengan facilidades para cobrarlas: la Diputación de Bizkaia, por ejemplo, les ha empezado a exigir un certificado de bienes en origen no requerido por ley, imposible de conseguir para muchas personas y que incluso lleva a muchas otras a endeudarse para obtenerlo.

Ikuspegi también revela que ha subido en 9 puntos el porcentaje de personas que temen tener que esperar más para recibir atención en los hospitales. ¿Tiene sentido pensar que un 6,1% de la población (la que representa la inmigración en Euskadi) va a influir sustancialmente en las listas de espera? Los estudios indican que las y los inmigrantes acuden poco al médico. En 2007, cuando representaban el 10% de la población del Estado, la Sociedad española de Medicina Familiar y Comunitaria indicó que sólo eran el 5% de los pacientes de atención primaria. Este dato no debiera aliviarnos (aunque desmonte otro prejuicio) sino alarmarnos, porque revela dificultades para acceder a un derecho universal como es la asistencia sanitaria. Dicho organismo reconocía que "la falta de papeles o de información hace que los inmigrantes sólo vayan al médico cuando están realmente enfermos". Respecto a la vivienda, otra preocupación que aparece en el barómetro, SOS Racismo realizó un informe disponible en su web (www.sosracismo.org) que muestra las barreras racistas que obstaculizan la búsqueda de

piso.

En resumen, todos los prejuicios que recoge el barómetro de Ikuspegi se basan en la idea de que a las personas inmigrantes se les dan facilidades. Ese mensaje cala profundo, a pesar de la evidencia de que ser inmigrante supone enfrentarse a todo un marco normativo que les discrimina en todos los ámbitos de su vida. En todo caso, lo peligroso no es tanto que existan miedos infundados, sino que las instituciones los avalen. Los gobiernos vasco y español, lejos de emprender acciones para evitar brotes racistas, se aprovechan de las percepciones distorsionadas.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, lleva toda la legislatura presentando políticas dirigidas a inmigrantes como si fueran medidas anticrisis. Recordemos el estrepitoso fracaso que ha tenido el Plan de Retorno Voluntario, una de sus propuestas estrellas, inspirada en la filosofía de que quien no produce estorba. El Gobierno esperaba convencer a alrededor de 100.000 inmigrantes, pero un año después de su puesta en marcha han solicitado acogerse al programa menos de 10.000. La propia reforma de la Ley de Extranjería se ha impulsado bajo el discurso de que hay que adaptar la legislación a la nueva realidad económica, garantizando la prioridad nacional en el acceso al empleo. El propio ministro alimenta así la idea de que las personas inmigrantes nos quitan el trabajo y defiende el principio xenófobo de "los españoles primero".

El Gobierno vasco, por su parte, prepara un decreto de la renta de garantía de ingresos que limitará gravemente el acceso a la renta básica. Entre otras medidas, establece que podrán ser preceptoras un máximo de dos personas empadronadas por vivienda. Esto nos perjudicará a todas y todos, ya que la familia nuclear está dejando paso al aumento de otras modalidades de convivencia; pensemos en jóvenes o familias monoparentales que comparten piso. Pero se está presentando como una medida para poner límites a "casos de pisos patera y falsos empadronamientos", tal y como explicaba en un periódico Pedro Sánchez Amado, nuevo director de Acción Social. Apela a dos conceptos que en el imaginario colectivo se atribuyen a la inmigración, dos de los grandes mitos que se usan para estigmatizarla. Eso sí, acto seguido reconocía que el porcentaje de fraudes entre los preceptores de renta básica es muy bajo. Por otro lado, nos resulta totalmente absurdo el argumento de evitar los pisos patera, ya que precisamente quien pierda la renta básica tendrá que compartir piso con más gente.

Un paréntesis para citar la responsabilidad de los medios de comunicación. El tratamiento que están dando a la noticia sobre que este nuevo decreto incluirá a los jóvenes ex tutelados (destacando que esto incluye también a los inmigrantes) entre los colectivos que pueden cobrar la renta básica antes de cumplir los 23 años empeora la deterioradísima imagen de los jóvenes extranjeros no acompañados, a quienes se tacha continuamente de conflictivos y parásitos sociales, obviando la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedan al cumplir los 18 años.

Lo preocupante, repetimos, no son los miedos, sino que la clase política los canalice con medidas populistas que legitiman el racismo social. Una vez más, apelamos a la responsabilidad política. La crisis económica no es excusa para justificar ni los recortes de derechos ni el racismo social. Las cifras de Ikuspegi obligan a las instituciones a diseñar

medidas integrales que impidan que siga aumentando el recelo hacia las personas inmigrantes y al tiempo renunciar a políticas discriminatorias que refuerzan el racismo social.

No olvidemos que las reacciones xenófobas ante la crisis nos perjudican a todas y todos. En primer lugar, dividen a la clase trabajadora, restándole fuerza para luchar contra los despidos o la precariedad laboral. En segundo lugar, utilizar la inmigración como chivo expiatorio desvía la atención sobre las verdaderas razones de la crisis, sus responsables y las soluciones posibles.

Una última cuestión para quedarnos con buen sabor de boca: la botella también se puede ver medio llena. Hemos hablado todo el rato de los temores de la mitad de la población vasca. Pero hemos de reconocer a la otra mitad, la que se resiste al miedo y a usar como mecanismo de defensa los prejuicios racistas, la que se resiste al bombardeo de noticias que criminalizan a las personas inmigrantes, a los grandes titulares que sugieren que éstas reciben un trato privilegiado, a las políticas discriminatorias lanzadas para ganar votos. Esa mitad de la población no se siente amenazada por la diversidad: confía en un sistema de bienestar que hemos construido y mantenemos entre todas las personas, incluidas las migrantes de ayer y las de hoy.